

a cabo una política que cree determinado número de puestos de trabajo y de dar mayor amparo a los desempleados. ■

AUTONOMIAS

UNA OCASION QUE SE ESTA PERDIENDO

Josep Benet

AL iniciarse el nuevo periodo de sesiones de las Cortes se observa, con honda preocupación, cómo se está perdiendo la ocasión de resolver el problema de la coexistencia de diversos pueblos dentro del Estado español respetando sus identidades y derechos, que ofrece la Constitución de 1978. Esta preocupación es justificada porque la pérdida de esta ocasión puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad y consolidación de la democracia en España y la pacífica convivencia entre sus pueblos.

Ante la construcción de la España de las autonomías se han ido acumulando los errores de los sucesivos gobiernos de UCD. Primero fueron las improvisaciones del señor Martín Villa, que provocaron la farsa de las llamadas preautonomías. Después, aprobados la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Euskadi, fue la carencia de un proyecto gubernamental de construcción de la España de las autonomías.

Algunos parlamentarios reclamamos reiteradamente del Gobierno que expusiera este proyecto ante el Senado, en el caso de que lo tuviera. No se logró su exposición ni ante esta Cámara ni ante el Congreso. En la actual legislatura ni tan sólo se ha logrado que en el Senado se creen la Comisión Especial de Autonomías que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, debía haberse constituido para «realizar estudios sobre los problemas de las autonomías». Tampoco ha existido el gran debate público, por ejemplo ante la televisión, que exige un tema tan vital. Por el contrario, el Gobierno, prescindiendo de las Cortes, ha ido improvisando como siempre, hasta que ante el caos y la confusión que él mismo iba creando, tuvo la idea de encomendar a unos expertos, que lo son en ciertas materias, pero no en materia de autonomías, el llamado «Informe Enterría». ¿Por qué este informe no se encargó

a la Comisión Especial de Autonomías que debe existir en el Senado?

Hurtada esta cuestión a las Cortes, llegan los desgraciados pactos autonómicos que el señor Martín Villa, con su habilidad y veteranía, consigue que firme cándidamente el líder del mayor partido de la oposición, al mismo tiempo que excluye de su discusión a los partidos nacionalistas que tienen en su mano los gobiernos autónomos de Cataluña y Euskadi. Unos pactos que se firman con la advertencia de que no se va a permitir en las Cortes la modificación de su contenido convirtiéndose así en comparsas a los parlamentarios.

Los pactos se concretan en una frase: se van a homogeneizar las autonomías, desde arriba, sin darse cuenta de que la esencia de las autonomías radica precisamente en reconocer a cada pueblo el grado de autogobierno que desee, dentro de los límites de la Constitución. Sin darse cuenta de que en lugar del Estado de las autonomías se va a crear un Estado semifederal, que es algo muy distinto. Los expertos y los señores firmantes de los pactos parece que ignoran que el autonomismo nació en Cataluña después del fracaso del intento de la República Federal de 1873, como otro modelo de Estado más acorde con la realidad de una España en la que existen, guste o no, nacionalidades y regiones.

Finalmente, la construcción de la España de las autonomías podría haber sido la ocasión para modernizar una división provincial hecha hace 150 años, antes de la revolución industrial, en la época de las diligencias y cuando no existían teléfonos ni telégrafos, que respondía a unas realidades demográficas de una época, muy distintas a las actuales, cuando existen provincias que tienen menos habitantes que un barrio de Madrid. En lugar de aprovechar esta ocasión que pretende fortalecer la vieja organización provincial y en el caso de los pueblos, como Cataluña, que desean adaptarla a la realidad de un país moderno, se les prohíbe hacerlo.

Concluyendo: creo que se está perdiendo una ocasión histórica por falta de un auténtico sentido de Estado. Quisiera esperar que, al menos por parte del partido mayoritario de la oposición, que se reconsiderara su posición antes de que lo irreparable se produzca. ■

■■■ *Hubo un momento en que en España el parlamento estaba en los periódicos; se habló del «parlamento de papel». Luego, hubo un parlamento; y, ahora, otra vez, la Prensa sigue siendo la que suscita y debate las grandes*

ideas; una Prensa que trata de definirse como ajena a los intereses y los pactos de los partidos, y de los grupos dentro de los partidos. La radio se ha incorporado con brío, sobre todo a partir del 23 de febrero, en que tuvo una noche gloriosa; y la televisión, con la lucha por la ruptura del monopolio en la televisión estatal, y la introducción de la televisión privada, se unen a este parlamento; esta temporada puede ser decisiva en todo ello. ■■■

COMUNICACION

BATALLA EN RETIRADA

Juan Luis Cebrián

HACER de oráculo sobre el futuro próximo de los medios de comunicación en

nuestro país empieza a resultar por desgracia demasiado fácil en los tiempos que vivimos. Aun admitiendo que la historia de los hombres se componga en una buena medida del resultado de las batallas entre el azar y la necesidad, hasta el azar es casi previsible entre nosotros en lo que se refiere al desarrollo de las libertades y su ejercicio. Siempre me ha llamado la atención, por lo demás, el carácter indivisible de éstas, el hecho para mí incuestionable de que cuando un hombre o una sociedad son más o menos libres lo son en todos los aspectos y realizaciones de la vida; y allí donde crece la represión en una faceta de sus actividades, por mínima que pueda parecer, de hecho se pone límite a su libertad global, a su condición de ser libre. Por eso la libertad de expresión no es ajena al resto de las libertades ni estas son finalmente parcelables: hay más libertad de prensa allí donde hay simplemente más libertad, y si la prensa, la creación intelectual y el pensamiento, se reprimen, se persigue en realidad la libertad toda: sus beneficios y sus riesgos.

La realidad española viene marcada, desde el 23 de febrero, y aún desde antes, por el miedo a la ruptura violenta del sistema democrático a manos de militares golpistas con mayores o más pequeños asertos en zonas de la sociedad civil. Hasta que el consejo de guerra contra los culpables de aquel indecente delito no tenga lugar y estos sean condenados, no habrá elementos de juicio suficientes para establecer con un criterio mínimamente acertado cuál ha sido la capacidad de respuesta del poder político frente al motín de las armas. En cualquier caso, y en lo

LA TEMPORADA QUE SE NOS VIENE ENCIMA



que concretamente se refiere a la libertad de expresión y a los medios de comunicación de masas, la actividad del Gobierno y de las fuerzas políticas ha visto incrementados sus signos represores desde la fecha de la intentona del golpe. En el terreno jurídico la aprobación de la llamada ley de Defensa de la Constitución supuso, antes del verano, una estocada a los principios defensores de la libertad de prensa y, justo es de entender, al conjunto de libertades reconocido y definido teóricamente por la Constitución. Las posibilidades de caución gubernamental del derecho de libertad de expresión han abonado el terreno para la funesta práctica de la autocensura en las redacciones y para un aumento del intervencionismo de las empresas en la definición de lo que es «no publicable».

Junto a esta que podríamos llamar «amenaza institucional» la presión ucedista cara al control del mayor número de medios de comunicación posible es evidente. Tanto en Madrid como fuera de la capital del Estado la izquierda del consenso y la concertación se encuentra cada día más huérfana de tribunas. La gran parte de la prensa diaria, con contadísimas excepciones, está de hecho en una u otra forma al servicio de los intereses que el Gobierno globalmente representa. La próxima subasta de los periódicos supervivientes de la red de prensa del Movimiento parece que será la ocasión de reforzar esta omnipresencia ucedista en los diarios. La práctica no es, sin embargo, exclusiva del partido del Gobierno, y en Cataluña es detectable similar cúmulo de presiones provenientes de la Generalidad. Así resulta que la radio, que escapa con mejor fortuna a este tinglado de compromisos, se ve asediada con ofensivas como las que se establecen contra las emisoras municipales en Cataluña o la demora de nuevas concesiones de frecuencia modulada, dos veces aplazadas por la Administración. En televisión, el debate sobre la televisión privada amenaza con devenir en el establecimiento por decreto de una cadena progubernamental que compita con la propia RTVE en obediencia y sumisión al poder constituido. Este se encarga además de completar con el soborno y la corrupción de los perio-

distas lo que buenamente no llega a hacer a través del control de las empresas o de la administración de las subvenciones.

Otros problemas subyacentes a la organización de la tarea informativa en este país contribuyen también a crear confusión y desánimo entre quienes suponen que la libertad de expresión es piedra angular de todo sistema de libertades. Por un lado está la polémica del carné, que afecta a los sistemas de acceso a la profesión y a la deficiente formación actual de los periodistas. Junto a ella, la inexistencia de una asociación o intersindical que represente verdaderamente a los profesionales, el monopolio procaz y vergonzante de las Hojas del Lunes —que quizá será roto definitivamente el año que viene—, la ausencia de un estatuto de autonomía de la agencia Efe, el mantenimiento de una política arbitraria de subvenciones y ayudas estatales, los problemas de la política de materias primas —esencialmente el papel—, o los que plantea la renovación tecnológica, jalonan de sombras e incertidumbres una actividad cada día más caracterizada por el desánimo y —¿se me permitirá la palabra?— el desencanto de quienes no quieren caer en el compadreo ni en la miserable obediencia. A saber: de quienes siguen creyendo en la prensa como un sistema de control y de contestación al poder.

Cinco años después de la transición se puede decir que todo o casi todo queda por hacer en este terreno. La inexistencia de una organización profesional fuerte y autónoma de los periodistas españoles ha contribuido a la creación de esta situación en la que el reclamo de una entrega real a los profesionales de la responsabilidad social de la información se hace cada día más difícil de llevar a la práctica. En todo ello se aprecia una falta de dirección política por parte del Gobierno y de los partidos de la oposición en lo que se refiere a la defensa de la libertad de informar, un deseo casi único de controlarlo y manipularlo todo y una orfandad grande de los principios morales que informan a un democracia.

¿Cuál ha de ser el futuro próximo de los medios de comunicación en España? es la pregunta que me hace esta revista. La respuesta es por desgracia sencilla: una batalla en retirada contra el insistente poder inquisitorial de la censura. Revestido este, eso sí, de formas y hábitos novedosos que tratan de justificar su acción por mor de la razón de Estado y de la defensa de la democracia. Todo ello para terminar con la reflexión demagógica y nada autocrítica de que, si bien se mira, los periodistas y los periódicos nos hemos pasado. ■

AMBIENTE

SE BARRUNTA LA PESTE

Mario Gaviria

EL Estado ni protege a los ciudadanos ni les permite autoprotgerse. La historia del aceite de colza, mortífero, es un símbolo de la pobreza y oscurantismo modernizados. La lucha ecologista viene desde hace más de 10 años gritando «que viene el lobo», y estamos tan seguros de que la degradación del entorno y de la salud de los españoles estaba trayendo consecuencias graves, que ante la neumonía tóxica no hay ni un solo comité ecologista o antinuclear que se haya molestado en sacar ni siquiera un comunicado. Nos han acusado de agoreros, apocalípticos, exagerados, «que eso de la contaminación no es para tanto».

La nueva Edad Media está aquí en forma de enemigo invisible, ubicuo. Hace años venimos repitiendo que las expectativas de vida media están bajando en todos los países industriales avanzados, entre los que se encuentra España, que están cayendo en las avanzadillas de las nuevas plagas.

El aire que respiramos, las radiaciones, el agua que bebemos, los alimentos, son algo ajeno, incontrolable, incontrolado. El Estado, teóricamente paternal, sólo es ya opresor; en lugar de proteger al ciudadano, vive de él.

Las modernas pestes están entrando en las sociedades industriales por los pulmones, por el estómago, por la piel, como las anteriores pestes.

El aceite asesino es como la peste negra, que no se sabía por dónde entraba, cuál era su etiología, cómo se remediaba o cómo evitar que te atacase. La misma indefensión ante el aceite, ante el que sólo queda o no comer o irse de España.

El llamado sentimiento trágico de la vida, el llamado estoicismo español, no es sino sumisión al Estado y a los caciques del poder del capitalismo, que ya ni siquiera enciende lamparillas de aceite, aunque sea tóxico, a Santa Rita, en espera de que no le toque ser de los envenenados. La salud, ecológica y sanitaria, en España es como un bingó, algo fortuito.

Si la sequía continúa, el próximo curso pudiera dar paso a situaciones de Sanidad hídrica muy graves. Aunque se está silenciando, más del 20 por ciento de los españoles están sufriendo graves restricciones de agua; en los ríos infectados de este septiembre casi seco corren las aguas más